

cio ejecutivo sobre pesos que el C. Luis García ha promovido contra el C. José Domingo Díaz:

Segundo: no hay condenación de costas.

Tercero; remítanse las actuaciones al juez 3º de lo civil de México con copia certificada de esta sentencia, remitiéndose copia igual al de Cholula para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazón.—J. M. Lafragua.—Ignacio Ramírez.—M. Auza.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Diciembre cinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Benigno Landa*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. Carlos Mañé, como apoderado del presbítero D. Maximiliano Brito, contra la primera sala del tribunal superior de justicia del Estado, por violación de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El Lic. D. Carlos Mañé, en representación del presbítero D. Maximiliano Brito, pretende que la justicia nacional ampare y proteja á este Sr. contra una resolución del H. tribunal de 3ª instancia del Estado, que manda anotar de insubsistente una escritura por valor de dos mil pesos otorgada á favor de su poderdante, con hipoteca de una casa que figura en el concurso á bienes del finado D. Ignacio Quijano. Y por creer el actor que esa resolución viola en la persona del Sr. Brito, la garantía

sancionada en el art. 27 del pacto federal, funda su ocurno en el 1º fracción 1ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, y pide desde luego la suspensión del acto reclamado, que vd. se ha negado á decretar por los justos motivos expresados en el auto que sobre este punto pronunció el 18 del corriente. El fiscal pudiera detenerse, antes de entrar en el fondo de la solicitud, á examinar la personalidad con que la hace el Lic. Mañé, pues tomándola del poder cuyo testimonio ha exhibido, el cual no contiene cláusula expresa y especial como el presente, es muy dudoso que deba ser reconocida su personalidad por solo las cláusulas generales contenidas en aquel instrumento. Sin embargo, el fiscal, no opendrá resistencia alguna á la del actor en este juicio y menos aun, cuando vd. ya ha legitimado este carácter con que se presentó por virtud de la declaración hecha en su mencionado auto de 18 de este mes. Pero tiene el infrascrito que ocuparse de la procedencia del recurso, no solo por acatamiento á la ley que lo organiza sino por respeto á la soberanía é independencia del tribunal contra quien se ha intentado. Y efectivamente, el acto que se reclama es el resultado, justo ó injusto, de un debate judicial sostenido desde la primera hasta la última de las instancias que podía tener el hecho que se debatía; y cuando el actor no ha conseguido el triunfo de sus pretensiones ante los tribunales de este Estado, que han obrado en la órbita de sus atribuciones y guardando las fórmulas tutelares de los procedimientos, ¿podrá conseguirlo ante un tribunal de la República por vía de amparo contra la sentencia ejecutoria que no cuadra á la intención del quejoso? El ministerio público proclama que no. Porque eso sería dar á todos los negocios judiciales una cuarta instancia, que el art. 24 del código fundamental de la Nación no concede ni á los juicios criminales; pues que otro nombre no podía darse al tribunal que con su fallo, y lo que es peor, sin oír,

á las demas partes interesadas en la sentencia que se reclama, viniere á declarar que esta no produce sus efectos contra quien fué vencido en el juicio en que se pronunció. Mas esto no es posible, porque allá está el art. 8º de la citada ley orgánica que prohibe la admision de este género de recursos, y está allí tambien el art. 41 del pacto federal que reconoce la soberanía de los Estados, en su régimen interior, y que nosotros debemos respetar en la independencia de los poderes que los constituyen. La ley debe cumplirse, porque no se diga que rige solo de derecho y que en realidad yace muerta en el código en que fué escrita: los fallos de los tribunales tienen que ejecutarse, porque es preciso poner términos de una vez á las cuestiones que ante ellos se agitan asegurando los derechos de las partes contendientes. El poder judicial de la Nación no es la omnipotencia humana, y los recursos de amparo que se intentan ante él contra sentencias dadas en toda forma de juicio, no pueden invalidarlas; porque es preciso no secar la fuente de la confianza y herir la garantía de lo que se ha obtenido en él; porque es necesario conservar muy alto el prestigio de los amparos fiados á la justicia nacional, no convirtiéndolos en un sistema odioso y tiránico de la justicia de los Estados; porque es indispensable, en fin, evitar que el remedio que en ellos se busca no sea peor que el mal mismo que intenta remediarse. Una sentencia definitiva y ejecutoria, podrá dejar sentimiento y pesar al quejoso que no salda victorioso en ella; pero quita toda incertidumbre respecto de los derechos controvertidos y pone término á las penosas fatigas de la lucha judicial. Pero suponiendo que no obstante estos principios, debe admitirse el recurso interpuesto por el Lic. D. Carlos Mañó, el fiscal, siempre pediría con toda la fuerza que le dá el carácter de su ministerio, que no se le conceda contra la resolución reclamada; primero, porque no existe el acto de anotacion de insubsisten-

cia de la escritura de hipoteca otorgada á favor de su poderdante, como lo ha justificado plenamente el tribunal que se dice haberla decretado; y luego, porque es falso, aun cuando se realizara tal anotacion, que con ella se viola la garantía individual consignada en el art. 27 de la Constitucion por que nada se quita, en nada se expropia al presbítero D. Maximiano Brito. Su apoderado, el Sr. Mañó, ha confundido lastimosamente la propiedad de los dos mil pesos, que dice pertenecen á aquel con la escritura hipotecaria que ledáccion real para cobrarlos: de esa suma se desprendió voluntariamente el acreedor, desde que por virtud de un contrato la pasó al dominio de su deudor, y de la garantía ó seguridad que mediante esa escritura, se reservó para cobrarla, tampoco se le despoja, pues que su derecho permanece en todo su vigor para ser definido en la sentencia de graduacion que se pronuncie en el concurso en que se discute su competencia con el de los demas acreedores. No hay, pues, violacion de garantía alguna en la resolución judicial reclamada; y no existe por consiguiente fundamento para pedir el amparo, en el presente juicio, que el fiscal pide se sirva vd. resolver negativamente.

Mérida, Octubre veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.—*P. Higueros.*

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Mérida, Noviembre ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por el apoderado del cura D. Maximiano Brito contra la sala 1ª del tribunal superior de justicia del Estado, que alega haberse violado en la persona de su poderdante la garantía del art. 27 de la Constitucion de la República, violacion que funda en el hecho de haber mandado anotar de insubsistente una escritura hipotecaria en un concurso, antes de darse la sentencia de graduacion de cré-

ditos. Visto el auto en que se niega la suspensión del acto reclamado; el informe justificativo de dicha sala 1ª; el pedimento fiscal y la citación para sentencia.

Considerando: que para apreciar debidamente si la anotación de insubsistencia de una escritura hipotecaria puede ser una expropiación contraria al art. 27 constitucional, se hace preciso saber si una hipoteca es propiedad de la persona en cuyo favor se haya constituida, y luego si se puede ocupar, siendo así que lo que prohíbe el art. referido es, la ocupación de la propiedad, salvo en los casos de excepción que determina: que el primer punto está resuelto en sentido afirmativo y no queda duda de que la hipoteca es propiedad del que lo posee, pues Escribano dice: "La propiedad tiene dos acepciones: tan pronto expresa el derecho en sí mismo, que también se llama dominio, y tan pronto significa la misma cosa en que se tiene derecho;" y el código civil, hablando de las cosas que pueden ser objeto de propiedad, en la fracción 8ª del art. 782 "trac, las servidumbres y demás derechos reales sobre inmuebles;" que no obstante que la hipoteca es propiedad, no puede ser ocupada, porque por ocupación entiende Escribano: la aprehensión o apoderamiento de una cosa que carece de dueño con ánimo de hacerla propia," cuya aprehensión no puede verificarse con una propiedad de derecho: los derechos se usurpan, no se ocupan: que si es cierto que el art. 2057 del código civil separa de los concursos las hipotecas, esto tendrá lugar con las constituidas después de la promulgación del código: que por último, no consta que la sala 1ª haya mandado anotar de insubsistente la hipoteca del quejoso.

Por lo expuesto y conforme al art. 101 del pacto federal, de acuerdo con el parecer fiscal, la autoridad decreta:

Primero; La justicia de la unión no ampara ni protege al quejoso, por ser improcedente el recurso invocado.

Segundo; Sáquese testimonio de este

fallo para su publicación, y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para su revisión, de acuerdo con los artículos 13 y 27 de la suprema ley de 20 de Enero de 1869.—*I. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 17 de Octubre de este año, promovió ante el juez de Distrito del Estado de Yucatan el C. Carlos Mañé, como apoderado del presbítero Maximiano Brito, contra el fallo de tercera instancia que pronunció la primera sala del tribunal superior de justicia del mismo Estado, mandando en sentir del promovente anotar de insubsistencia una escritura hipotecaria á favor de su representado, con cuya resolución cree violada en la persona de este la garantía individual que otorga el art. 27 de la Constitución de la República. Visto el informe rendido por la 1ª sala del tribunal, autoridad responsable: los documentos justificativos que acompaña: el pedimento del promotor fiscal: los escritos del quejoso alegando ante el juez de Distrito y ante esta Corte Suprema de Justicia cuanto le ha parecido conveniente, y lo demás que consta de autos y verconvino.

Considerando: que la queja presentada en nombre del presbítero Brito, importa cuestiones que ya han sido resueltas por autoridades competentes, empleando aquel sus recursos legales, y aplicando estas las leyes relativas hasta llegar por todas las instancias de un juicio á una ejecutoria: que en este concepto, no existe la violación de garantías que dicho presbítero ha invocado, pues falta la violencia que la constituye, y el conocimiento sobre el fallo del

tribunal de justicia de Yucatan en el caso de derecho civil á que se refiere, es ageno de un juicio de amparo, con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del juez del Distrito de Yucatan, pronunciada en México á ocho del presente mes, declarándose que la justicia de la Union no ampara ni protege al presbítero Maximiano Brito, contra el fallo de tercera instancia dictado por la primera sala del superior tribunal de Justicia del repetido Estado, de que se queja, alegando, que viola en su persona la garantía que otorga el art. 27 de la Constitucion federal.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden, con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordáz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado 1º de Distrito de México, por el C. Joaquín López, quien asegura se han violado en su persona las garantías que otorga la Constitucion federal, por el C. Gobernador del Distrito al consignarlo al servicio de las armas en el batallon número 23.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR  
FISCAL.

C. juez:

El promotor dice: que recibido á prueba el presente juicio de amparo, ninguna presentó el C. López, y como del informe del C. gobernador y acta del tribunal de vagos que acompañó, está comprobado que no fué él sino el tribunal de vagos quien lo sentenció al servicio de las armas, siendo legal la resolucion del tribunal por estar conforme con las atribuciones que le concede el art. 85 de la ley de 5 de Enero de 1857, es evidente que no ha habido violacion de los artículos constitucionales reclamados. No hay datos para creer que el tribunal de vagos no obró con arreglo á la ley; pero aun admitido ese supuesto, sus determinaciones pudieron objetarse en la forma prevenida por la ley de su creacion; pero nunca en vía de amparo y menos cuando esta ley en su artículo 8º ordena, que este recurso no tenga lugar en negocios judiciales, y este carácter se ha dado por diversos juicios de amparo á las sentencias del tribunal de vagos. Por lo expuesto, puede el juzgado declarar que no ha lugar al amparo solicitado por el C. López.

México, Noviembre de mil ochocientos setenta y uno.—*Herrera Campos.*